

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Exp. 013-2021-00445-02

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de JUAN ALONSO RICAUTE YARCE frente al auto que aprobó la liquidación de costas, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP -.

**ANTECEDENTES:**

En sentencia que se profirió el 20 de enero de 2023 la juez de primera instancia, atendiendo el contexto de la litis encaminada al reconocimiento la mesada 14 sobre la pensión de jubilación convencional percibida, ABSOLVIÓ a la demandada, imponiendo las costas procesales a la parte demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

Esta decisión se confirmó en segunda instancia en todas sus partes, sin imposición de costas procesales por conocimiento del trámite por el grado jurisdiccional de consulta.

Con estos referentes se aprobó la liquidación de costas por auto del 13 de febrero de 2024 (Archivo 33), decisión frente a la cual el mandatario judicial de la parte demandante expresó su inconformidad, interponiendo recurso de apelación, por considerar que la tasación debía corresponder a lo sumo a \$100.000 como proceden muchos despachos judiciales, aduciendo que en su sentir son desproporcionadas las fijadas, en tanto su mandante acudió a la jurisdicción por

considerar ostentar un derecho vulnerado por la demandada, indicando que debe auscultarse la intencionalidad de las partes en el proceso, en el sentido de observar si la acción es manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o si los hechos eran contrarios a la realidad, lo que no ocurre en el presente; además que considera que la gestión profesional debe ser mirada, sin que se haya demostrado los gastos en que se incurrió por la contraparte.

El director del proceso por providencia que emitió el 08 de marzo de 2024 (Archivo 36), concedió el recurso vertical.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

#### CONSIDERACIONES:

De cara a los antecedentes, el problema jurídico en esta ocasión se circunscribe a determinar si es plausible o no disminuir el monto de las agencias en derecho, incluidas en el auto que aprobó la liquidación de costas a cargo de la parte promotora del juicio.

Pues bien, por sabido se tiene que, para la estimación de las agencias en derecho, debe acudir a las tarifas fijadas por los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, pues a estos remite el numeral 4º del artículo 365 del CGP, aplicable a estos ritos por lo previsto en el 145 del CPTSS; dicha disposición que regula los parámetros para la liquidación concentrada de costas, señala que si en los referidos acuerdos se establece un mínimo, o éste y un máximo, para la movilidad entre uno u otro límite, *el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.*

El Acuerdo que aplica a este proceso es el PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, por razón de que la demanda se impulsó con posterioridad, el 27 de septiembre de 2021 (Archivo 01), mismo que en su artículo 5º regula la tarifa de las agencias en derecho de primera instancia para los procesos de mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido, disponiendo el rango de 1 a 10 SMLMV para aquellos asuntos que carezcan de cuantía o pretensiones pecuniarias sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.

Vistas así las cosas, la Sala encuentra que en efecto el valor de \$1.160.000 cumple el estándar de rangos dispuestos en el acuerdo, porque es cierto e indiscutido que para la fijación de las agencias en derecho los falladores deben acogerse a las tarifas dentro de los límites que allí se estipulan, pero también es verdad que debe mediar un ejercicio discrecional de ponderación, para que desde tales orientaciones se fije un monto que sea equitativo, razonable, prudente y proporcional, apreciando no solo la duración y calidad de la gestión profesional realizada en el transcurso del proceso, sino que debe ponerse de relieve la calidad de la parte vencida en juicio de cara a la contraparte, donde en este caso resalta la desproporción de los roles dentro del trámite y el sistema que no permite equipararlos, por lo que debe tomarse en consideración que además de que la naturaleza del proceso y la finalidad de la actuación desplegada no implicó gran complejidad ni un esfuerzo profesional evidente o preponderante, pues además de darse respuesta a la demanda ninguna otra actuación se visualiza, y cuya duración excedió solo un poco más del año, el criterio equitativo debe constituirse también en un factor importante para evitar imposiciones que en este caso el solicitante no se encuentra en posibilidad de soportar.

Lo anterior, se suma a lo que expuso el órgano de cierre constitucional respecto a la condena en costas contemplada en los preceptos 365 y 366 del C.G.P: *"(...) La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe o siquiera culpable de la parte condenada. Sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas, como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaría de la condena incurrió en el proceso. Siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte. Ni pueden asumirse como una sanción en su contra. (...)"*.

Es así como se considera que imponer el equivalente a \$500.000 da respeto y salvaguarda además de los criterios de duración y naturaleza, el principio de igualdad y equidad, circunstancias que revelan que la modificación es procedente con coherencia y análisis de las particulares circunstancias del asunto concreto.

#### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, **MODIFICA** el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia

conocidas, para imponer como agencias en derecho a cargo de la parte demandante la suma de \$500.000 por las razones que fueron expuestas en la parte motiva.

La presente decisión se notifica en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 078 fijados el 8 de mayo de 2024, en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El secretario.